



Insurrección

Revista semanal del Comando Central
Edición N.646 del 13 de agosto de 2018



¡Están haciendo
113 marchas
por la vida
y por la paz!



¡Avísele al
ministro de
defensa!

POSESIONADO

SUMARIO

[Editorial]

DUQUE, ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

4

[Caricatura]

EL DISCURSO DE MACÍAS

Autor: NuChe

9

[Solución Política]

POR LA VIDA Y POR LA PAZ

Autor: Isaura Ochoa

10

PERSECUCIÓN POR ALIMENTAR LA VERDAD

Autor: Mara Giraldo

16

[Debates del Conflicto]

“EL QUE LA HACE LA PAGA”

Autor: Luis Olarte

22

URIBE RECUA, PERO NO CAE

Autor: Isabel Jerez

28

[Memoria Colectiva]

“CREO QUE ESTO TIENE SALVACIÓN”

Autor: Camila Eko

34

[Patria Grande]

DRONES DE CHINÁCOTA PARA CARACAS

Autor: Alcira Vesga

40

[Controversias]

EN VEZ DE ASESINARLO, ¿POR QUÉ NO LO CAPTURARON?

Autor: Comandante Pablo Beltrán

46

[Sumario] Fotorgrafía de la Marcha por la vida y por la paz, Ibagué 7 de agosto de 2018

QUE LA PAZ
NO NOS CUESTE
LA VIDA!

Insurrección

Revista Semanal del
Comando Central del ELN
Edición N.646 - agosto/13/2018



DUQUE, ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

El siete de agosto fue un día histórico para Colombia, tanto por la llegada de Iván Duque, a la Casa de Nariño, como por la inédita y cada vez más creciente movilización ciudadana, que ocurrió dentro y fuera del territorio colombiano, demandando al unísono unos bienes comunes: la vida y la paz.

Horas antes de la toma de posesión, y de que Duque arengara en la plaza de Bolívar estrenando banda presidencial, miles de colombianos abarrotaron las calles de 113 ciudades del país y se concentraron en por lo menos 60 ciudades del mundo.

El reclamo fundamental de la sociedad fue la paz, pero también **la gente se manifestó por el respeto a los Derechos Humanos**, porque cese la matanza de líderes sociales, que ya suman más de 400, desde 2016, y se advirtió al gobierno entrante -al que muchos consideran una tercera temporada de Uribe-, para que no desvanezca los anhelos de paz que la gente reclama.

Duque, quien en campaña amenazó con hacer “trizas” los acuerdos de paz con las guerrillas, en su primer discurso se mostró como alguien conciliador, reconociendo la **capacidad de “resiliencia” del pueblo colombiano y esa expresa voluntad de paz**, que se ha volcado a las calles en los últimos tiempos.

Sin embargo, esa narrativa de conciliación y de construir paz se estrella con el anuncio de un pacto por la legalidad. Duque dice que a través de ese pacto corregirá fallas estructurales “que se han hecho evidentes en la implementación”, en clara alusión al acuerdo de paz firmado con las FARC hace dos años; pero, esto significa **desconocer un acuerdo de Estado**, y un aviso de lo que puede esperar la Mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

El gobierno entrante insistió en que quiere la paz, pero sometida a los intereses de las élites dominantes. La apuesta real por la



paz está ahora en ese músculo ciudadano que se manifestó en las calles de Colombia, pero también en plazas y vías de París, Berlín, Madrid, entre otras ciudades.

La exigencia de paz va más allá. Además de la presión popular, el gobierno tendrá que atender las exigencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y corporaciones transnacionales quienes para invertir y mantener programas en el país, requieren de una estabilidad y tranquilidad real.

Hoy más que nunca, el deseo de paz está en la cancha de la sociedad que, desde las últimas votaciones, perdió el miedo a exigir a las élites el derecho a vivir en paz, negado durante décadas. En contravía con los augurios de los seguidores del ex presidente Uribe, ahora hay más de ocho millones y medio de colombianos que cree en la vía política, para acabar con el conflicto armado y voltear la página de dolor y sangre que ha vivido el país. **Tarde o temprano, obligadas o no, las élites dominantes tendrán que facilitar los caminos de la paz y las transformaciones.**

EL DISCURSO DE MACÍAS



POR LA VIDA Y POR LA PAZ



Los vínculos del presidente Duque con Uribe Vélez, generan preocupación por los antecedentes, como encarcelamientos en los llamados falsos positivos judiciales y más de 400 líderes asesinados desde 2016.

El nuevo Gobierno sintió la fiesta de la resistencia, en un hecho histórico, pues **es la primera vez que un presidente hace su posesión con el pueblo en la calle haciéndole un llamado de atención.**

Por la vida y la paz, la sociedad colombiana realizó el 7 de agosto, 113 concentraciones en 82 ciudades de Colombia; además, de 60 plantones en Europa y América.

En Medellín la marcha multitudinaria inició en el Teatro Pablo Tobón Uribe. **En el llamado 'bastión uribista', miles de antioqueños gritaron a plena luz del día, 'Antioquia no es Uribe'.**

En Bucaramanga, profesores, estudiantes, trabajadores, familias y colectivos de mujeres se declararon en **desobediencia civil con el nuevo Gobierno**. El punto de encuentro fue la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el recorrido de la movilización terminó en el Parque San Pío, en donde una tarima esperaba a los marchantes y su carnaval de resistencia como ellos mismos llamaron, con actos culturales y arengas, que dinamizaron el encuentro.

En Barrancabermeja, trabajadores y trabajadoras de la Unión Sindical Obrera (USO), representantes de organizaciones sociales del Magdalena Medio y jóvenes, participaron de la manifestación en la cual **exigieron garantías para la oposición y defensa de la vida de las lideresas y de los líderes sociales**.

Tras recorrer las principales calles de Cali, muchos caleños y caleñas realizaron una “Culatlón”, para expresar que “el gobierno de Duque no nos representa”; de igual manera, varios pueblos indígenas llegaron a la





ciudad para **rechazar la represión contra las comunidades y sus líderes**. También en Popayán, los pueblos del suroccidente colombiano alzaron su voz de resistencia contra las políticas belicistas de la banca-
da uribista.

En Cúcuta, los pobladores se movilizaron por las calles de la ciudad **exigiendo respeto a sus derechos y libertades**, denunciando la persecución y asesi-

nato a líderes sociales, y rechazando la masacre perpetrada por encapuchados a plena luz del día el pasado 30 de julio en El Tarra, uno de los municipios más militarizados de la región.

En Casanare, en el marco de la movilización nacional por la vida y la paz, campesinos e indígenas, representados por varias organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, se pronunciaron en un

acto público donde **rechazaron la estigmatización y criminalización del liderazgo social**. Además, expusieron estar más que nunca firmes por la defensa de sus territorios, visibilizando las problemáticas derivadas de las políticas extractivistas mine-
ro-energéticas.

En Barranquilla, diversas organizaciones sociales y culturales participaron en el 'Carnaval por la Vida y la Paz', que se cumplió en el parque del Cementerio Universal. Y muy cerca, en Cartagena en el histórico Camellón de Los Mártires, se hicieron públicos los **clamores por el cese de los asesinatos sistemáticos contra los líderes sociales**, el respeto a la vida de toda la comunidad y por la defensa de la democracia y los Acuerdos de Paz, amenazados por los seguidores de Uribe Vélez.

En Bogotá, miles de manifestantes salieron del Parkway, la

Universidad Nacional y el Sena de la carrera 30 hacia la Plaza de la Hoja, expresando su desacuerdo con el regreso de Uribe a la presidencia; además que **denunciaron el modelo político y económico que representa el gabinete de Duque**, la persecución judicial y el asesinato de líderes y lideresas sociales que se viene presentando a nivel nacional.

A nivel internacional, en Buenos Aires, Argentina y en Río de Janeiro en Brasil, así como en 60 ciudades, grupos de personas realizaron plantones para exigirle a las autoridades colombianas, **garantías que permitan proteger la vida**.

Así mismo en París y Lyon en Francia, Berlín en Alemania, Ginebra y Berna en Suiza, Valencia en España, y Bruselas en Bélgica, fueron algunos escenarios donde se realizaron **protestas en contra del nuevo gobierno de Colombia**.

PERSECUCIÓN POR ALIMENTAR LA VERDAD



A las alarmantes cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que se han registrado en los últimos meses, se suman las amenazas y asesinatos de periodistas en diferentes regiones del país. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de enero a julio de este año se han presentado 89 amenazas a periodistas, en el mismo periodo del año anterior se registraron 65.

Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el año 2016, se ha registrado un aumento del número de amenazas contra periodistas en Colombia. “Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129” [*].

Las amenazas de más resonancia han sido contra la periodista María Jimena Duzán, de la revista Semana; Jineth Bedoya, del diario El Tiempo; Luis Carlos Vélez de la FM, Katherine Leal, Juan Pablo Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruiz, de RCN Radio, y reporteros de La Silla Vacía. También el robo de varios elementos de trabajo del periodista Juan José Hoyos del periódico El Colombiano, los equipos robados contenían investigaciones judiciales que involucran a dirigentes políticos del país.

En casos más recientes, el Canal Uno denunció las amenazas de muerte a la periodista Paola Rojas por publicar un vídeo el 8 de agosto, donde el Centro Democrático celebra la posesión de presidente Iván Duque, el día anterior. En el vídeo se observa a senadores y congresistas de este partido celebrando el polémico discurso de Ernesto Macías, presidente del Congreso, donde además se burlan de sus opositores.

El periodista Ricardo Ruidíaz que ha denunciado la trata de menores y visibilizado las amenazas y asesinatos de líderes sociales del Magdalena Medio, este año ha recibido diez amenazas en su contra; pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió disminuir su esquema de protección el pasado 18 de junio. Catalina Vásquez, que desarrolla su actividad periodística en defensa de los derechos humanos de la comuna 13 de Medellín, vive una situación similar; a principios del mes de julio solicito a la UNP medidas de protección, por los asesinatos de fuentes cercanas a ella, la entidad no ha atendido al llamado y la periodista continúa en grave riesgo.

En Segovia, Antioquia, tuvo que salir desplazada Jhanuaria Gómez por las amenazas que estaba sufriendo; esta reportera se dedicaba a investigar las irregularidades alrededor de la minería y hacía pedagógica con las comunidades sobre las

PERIODISTAS AMENAZADOS



consecuencias de ésta en el territorio. Ella tampoco cuenta con protección de la UNP.

Mientras promovía la "Velatón Nacional", en Mocoa, Putumayo, fue amenazada la periodista Laura Montoya, a través de una llamada telefónica. La UNP aún no atiende el llamado de protección que fue solicitado.

La FLIP también denuncia los hostigamientos al periodista

Mauricio Rodríguez por parte del alcalde John Ever Calderón Valencia en Villagarzón, Putumayo y el despido injustificado del canal Villavisión.

El pasado primero de agosto fueron denunciados los asesinatos del periodista Valentín Rúa Tezada en el municipio de Suárez, Cauca, trabajaba en la radio comunitaria "Salvajina Estéreo", además adelantaba



trabajos comunitarios en el municipio; y Jairo Alberto Calderón Plaza, director del Portal de noticias "Contacto", de Tuluá, Valle del Cauca.

Es importante resaltar que los casos de periodistas asesinados y amenazados se relacionan con las denuncias que estos hacen sobre violaciones a derechos humanos, los asesinatos de líderes sociales, la trata de personas, la corrupción, el microtráfico, las afectaciones de proyectos minero - energéticos en las regiones, el abandono del Estado. Muchos de estos han solicitado medidas de protección a la UNP, pero aún no reciben respuesta.

En un comunicado del 3 de agosto de 2018, La Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, y la FLIP, "rechazaron la creciente ola de hechos que atentan contra la integridad física y moral de los periodistas", además convocaron a entidades del Estado como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Gene-

ral de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio del Interior para que se comprometan a "garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas, y velar por las condiciones necesarias para una prensa libre en todo el territorio nacional... a trabajar de manera coordinada, a sumar esfuerzos y políticas públicas para la prevención de la violencia contra periodistas y los medios de comunicación como medida de protección".

[*] <https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamentos/item/2252-alerta-por-incremento-en-el-numero-amenazas-de-muerte-a-periodistas-en-colombia>

“EL QUE LA HACE LA PAGA”



El que la hace la paga”, fue una de las frases llamativas del discurso de posesión del Presidente Duque. Dijo también que “desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición... **Las víctimas deben contar con que habrá reparación...** y que no serán agredidas por la impunidad.

Suena bonito como promesa y ojalá lo cumpla. Construir unos acuerdos y caminos de paz y asegurar para el país nuevos derroteros, presupone garantizar de verdad lo que plantea el nuevo Presidente. Pero de entrada surgen las dudas porque hemos visto posiciones contrarias al respecto, por parte del expresidente Uribe y sus seguidores del Centro Democrático, quienes llevaron adelante la campaña presidencial de Duque.

**Acabar con las
operaciones encubiertas
ilegales e ilícitas**

Valga preguntar, si **el Presidente Duque se comprometerá para sacar adelante la verdad sobre las**

ejecuciones extrajudiciales, llamadas como “Falsos Positivos”, que según un periódico británico, podrían llegar a 10 mil. Asesinatos que representan una mancha gravísima para el Estado colombiano, las elites dominantes y para los gobiernos en que ocurrieron con mayor crudeza.

¿Este gobierno propiciará que se conozca los principales responsables de esta política? Y qué **estas víctimas “no serán agredidas por la impunidad”**; para que salgan a la luz pública, ¿No sólo los ejecutores, sino también y principalmente los autores intelectuales? Muchos de ellos integrantes y dirigentes del Centro Democrático.

Igual. Hay que preguntar, si al hacer esa promesa, ¿**Duque garantizará que se sepa la verdad sobre la responsabilidad de altos mandos militares y de altos funcionarios del Estado** con el narco paramilitarismo, el narcotráfico, el despojo de 8 millones de hectáreas de tierra y la expulsión violenta, a sangre y fuego, de no menos de 7 millones de campesinos en las últimas décadas?

No más terror para acumular capital

También, salta otro interrogante. Si esta promesa del Presidente, indica que también ¿Habrá un compromiso con la verdad, sobre la promoción del paramilitarismo, de aquellos a los que eufemísticamente, se les está dando el nombre de “Terceros”?; es decir: empresarios, ganaderos, comerciantes y en general gente muy acaudalada y poderosa de las distintas regiones del país.

Está comprobada la promoción del paramilitarismo de ultra derecha por parte de empresas multinacionales

como Chiquita Brands -antes se llamó United Fruit-, en Urabá, la British Petroleum Company en el Casanare, la Drumond en el Cesar y otras más.

Desde marzo de 2015, la Fiscalía General informó que en los procesos de Justicia y Paz con los paramilitares surgieron 14 mil noticias criminales, que dieron origen a múltiples investigaciones en la justicia ordinaria. De ellas, 1.240 incriminan a dirigentes políticos, 1.274 a militares; el resto,



unas 11.400, se refieren a empresarios, ganaderos, bananeros, ejecutivos de grandes medios de comunicación, y ejecutivos de multinacionales y petroleras. Para las víctimas de estos “Terceros”, ¿Duque garantizará que haya verdad, justicia, reparación y no repetición?

¿Qué pasará con el expresidente Uribe, a quien cada vez más le aumentan los procesos judiciales por su responsabilidad frente

al paramilitarismo y el terror de Estado, con que ha azotado a este país? ¿Pagará lo que ha hecho?

A la élite dominante le cuesta asumir responsabilidades

Según los voceros de la élite, ni los mandos militares, ni el Estado, ni los altos funcionarios, ni los lla-

"EL que La Hace
La Paga".



mados "Terceros", han tenido responsabilidad en lo acontecido en el país en los últimos 40 años, ni en las violencias que ha dejado millones de víctimas. Según sus predicas, los únicos responsables, los únicos autores de la violencia, son las fuerzas insurgentes y quienes claman por un cambio de rumbo en este país. Con tal distorsión histórica y bajo la falsedad de estos parámetros, ¿Se pueden esperar compromisos con la verdad y la no repetición, como lo promete Duque?

¡Gulp!



Para construir y arribar en estos aspectos a nuevas situaciones y realidades en Colombia, para colocar las víctimas al centro y crear las condiciones para la no repetición, hay que garantizar "Verdad toda, Verdad todos".

Que salga la verdad de lo que ha acontecido y que ésta se difunda para el país. Ella aún se mantiene oculta y secuestrada para la gran mayoría de la sociedad y la opinión internacional, a causa de la manipulación de las élites dominantes y su Negacionismo, quienes son precisamente las mayores responsables de las violencias.

Hay algunos logros, que abren la puerta a la verdad. Es cierto, gracias a las exigencias y la presión de las fuerzas alternativas. Pero **aún prima la oscuridad y las tinieblas**. La verdad ha de cubrirnos a todos. Sin este precepto, tampoco llegaremos en el país a nuevos momentos.

Nosotros, como Ejército de Liberación Nacional, hemos manifestado públicamente que en este contexto de "Verdad toda, Verdad todos" **estamos dispuestos a facilitar esa verdad en lo que nos concierne y a reconocer responsabilidades** donde las tengamos. Los mismo le pedimos a al régimen y los detentadores del poder.



**URIBE RECUA,
PERO NO CAE**

Tal y como se esperaba, el anuncio de Álvaro Uribe de renunciar al Congreso de la República fue un **repliegue táctico** mediante el cual midió y reacomodó sus fuerzas hacia una nueva ofensiva.

Luego que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal, Álvaro Uribe anunció desde el 24 de julio que renunciaría al Congreso, por sentirse “**moralmente impedido para ser senador**”, pues según él, su defensa judicial podría interferir en las tareas como senador. Sin embargo, su renuncia fue más mediática que formal. Una semana después reuló y solicitó al presidente del Senado no presentar formalmente su carta de renuncia que había remitido a esa corporación.

Desprestigio, Amenaza, Asesinato: DAA

Con tal estrategia ganó tiempo y preparó su probada estrategia de DAA (desprestigio, amenaza, asesinato). **Abrió fuegos con el desprestigio mediático de todos quienes han jugado un papel importante**

para que la verdad sobre sus crímenes salga a flote; enfiló baterías contra la Corte Suprema de Justicia, contra el senador Iván Cepeda y contra los testigos que han tenido la valentía de brindar su testimonio, aún en medio de las presiones y amenazas contra sus vidas y las de sus familiares.

Por ello se puede observar cómo el proceso contra Uribe y el respectivo litigio ya no trascurre en el Tribunal. Ahora, los jueces no son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino sus amigos del Centro Democrático que al unísono atacan a los contradictores de Uribe; las audiencias no se hacen en las Salas judiciales, sino en establos; y las preguntas no se rigen bajo las normas del Procedimiento penal, sino bajo el criterio arbitrario del ex presidente, pues **Uribe sólo responde lo que le conviene.**

En esa carrera desenfrenada por evitar que avancen jurídicamente las investigaciones en su contra, le tocó recurrir con desfachatez a sus viejos amigos narcotraficantes, para que acudan en su defensa, a través de testimonios acomodados.

Testigos amigos “no impedidos”

Nuevamente Álvaro Uribe Vélez **emprende una estrategia para enlodar y desacreditar** a la Corte Suprema de Justicia a través del uso de testigos pagados o presionados, y montajes en los cuales se encuentran comprometidos sus abogados, paramilitares desmovilizados como el Mono Leche, organismos de inteligencia y políticos seguidores de Uribe.

En este escenario reaparece Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como alias “Tuso” Sierra, reconocido narcotraficante y emparentado con Mario Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe, quien se encuentra condenado a siete años y medio de prisión por concierto para delinquir en los procesos adelantados por parapolítica y es investigado también por delitos de lesa humanidad.

El “Tuso” Sierra era socio también de alias “don Berna” y se convirtió en la persona clave entre la Oficina de Envigado y el bloque narco paramilitar Héroes de Granada, en una relación en la

Lo importante
es que se
respete
la separación
de poderes:
el del legislativo,
el ejecutivo,
el judicial
y el poder
de Uribe



que se **intercambiaba droga por dinero y armas.** De acuerdo con una imputación de cargos de la Fiscalía General contra el “Tuso” Sierra, este capo narcotraficante introdujo al país 1.724 fusiles AK-47 y cientos de miles de municiones, entre 1998 y 2001.

La relación bien lograda entre la Oficina de Envigado y el Bloque Héroes de Granada, fue un entramado entre políticos, empresarios, militares, fiscales, paramilitares y narcotraficantes quienes

lograron dominar y controlar el Departamento de Antioquia y elegir numerosos Congresistas.

El “Tuso” sierra, apareció luego como “negociador” en las negociaciones entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a millonario pago que hizo este capo mafioso, al Comisionado de paz, para que le hiciera este nombramiento. En septiembre de 2004 le quitaron tal acreditación, pues había sido solicitado en extradición por parte por par-



te de los Estados Unidos. Pero dos años más tarde, fue postulado a los beneficios de la Ley 975 como desmovilizado del Bloque Héroes de Granada, con lo que su orden de extradición fue revocada por parte de Álvaro Uribe Vélez y sometido a la Ley de Justicia y Paz, con el fin de recibir los supuestos jurídicos que beneficiaban a los postulados paramilitares que se acogieran a esta ley.

EL "Tuso" Sierra, luego, fue un testigo clave en el proceso adelantado contra Mario Uribe y varios parapolíticos. En un contexto parecido al actual, fue extraditado a Estados Unidos un 13 de mayo de 2008 junto a otros 13 paramilitares más y el 14 de marzo de 2018 fue dejado en libertad en los EEUU. Y ahora a finales de junio de este año, en los EEUU **fue declarado empresario honorable** y por tanto lo borraron de la Lista Clinton [*].

Trilogía entre los EEUU, Uribe y el "Tuso" Sierra

En el 2008, el mismo alias "Tuso" Sierra, rindió testimonio en el cual afirmó que "había un complot contra el magistrado Iván Velásquez para frenar el proceso que adelantaba por parapolítica", en el que habían usado al paramilitar alias "Tasmania" y que luego este se retractó. A él le hicieron firmar una carta en la que aseguraba que el magistrado Iván Velásquez le había ofrecido beneficios a cambio de "enlodar al Presidente de la República". Sin embargo, los que le habían ofrecido contraprestaciones eran los seguidores de Uribe y sus abogados. Luego, el paramilitar Tasmania se retractó, pero nunca se lo perdonaron. Hace tres meses salió de la cárcel, y sufrió un atentado, pocos días después del asesinato del también testigo Carlos Areiza.

Sin embargo, en ese momento el narcotraficante "Tuso" Sierra, se encontraba bajo el supuesto de

decir la verdad so pena de perder los beneficios jurídicos. Ahora desde la libertad y viviendo en Estados Unidos, pero seguramente, sin la debida seguridad jurídica en Colombia. Cabe preguntarse: ¿Qué estará negociando Uribe con el "Tuso" Sierra o viceversa, a cambio de su falso testimonio?

Lo que realmente se encuentra en juego es la verdad, la verdad que debe conocer el país sobre los crímenes de lesa humanidad, del narco paramilitarismo, sus responsables, financiadores, políticos implicados, y mecanismos de impunidad. Pero a este paso y con los procesos jurídicos litigados en los medios de comunicación, la verdad se distorsiona, la memoria se entierra, los victimarios se convierten en víctimas y por el camino que pretenden imponernos, ojalá no termine Colombia pidiéndole perdón a Álvaro Uribe Vélez.

[*] El "Tuso" Sierra fue retirado de la Lista Clinton. Caracol Radio, 3-07-2018.

**“CREO QUE ESTO
TIENE SALVACIÓN”**



*“Yo creo en la vida, creo en los demás,
creo que este cuento
hay que lucharlo por la gente,
creo en un país en paz,
creo en la democracia,
creo que lo que pasa es
que estamos en malas manos,
creo que esto tiene salvación”.*

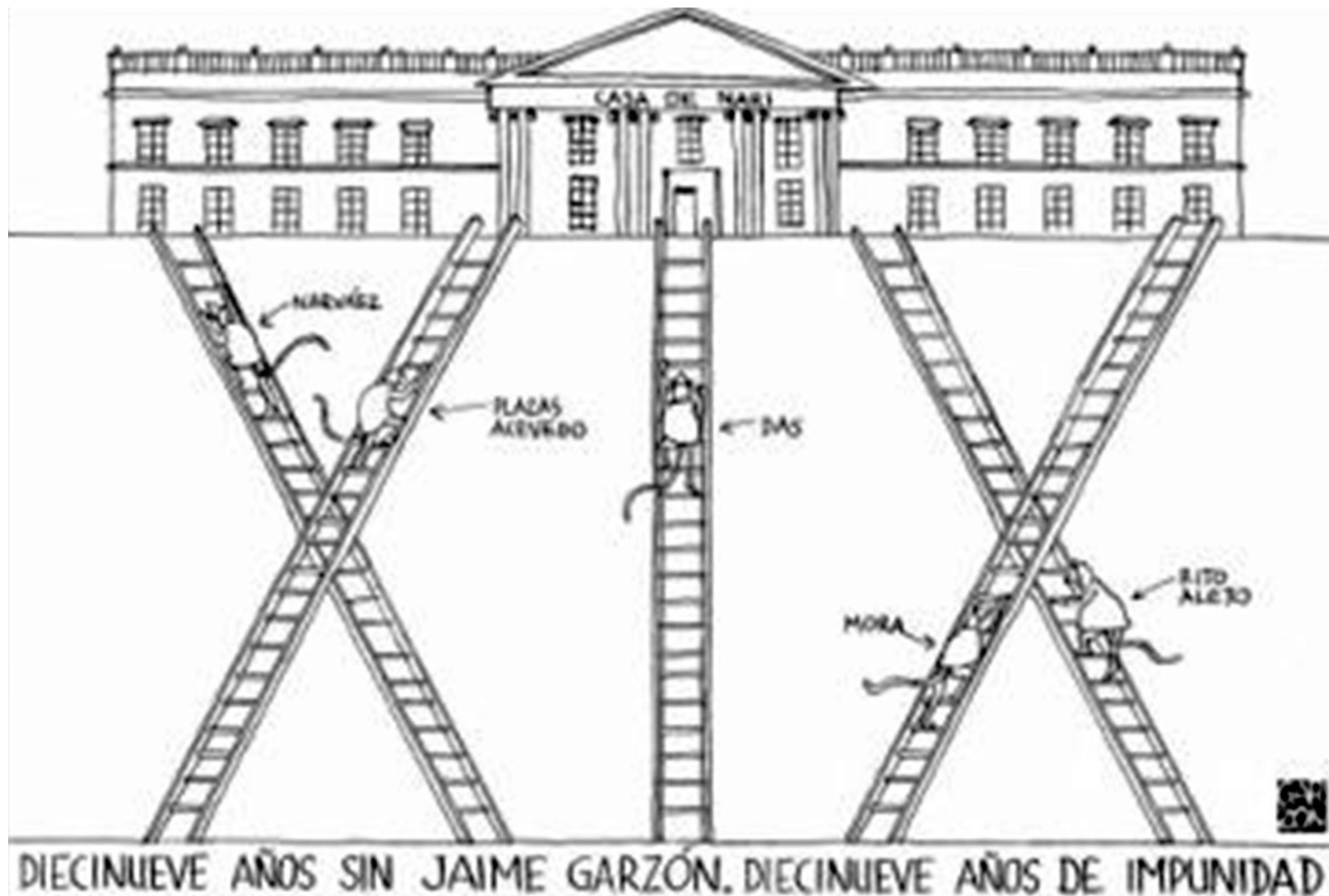
Jaime Garzón Forero

La neolumbrera neoliberal, fue la frase con la que Godofredo Cínico Caspa, personaje encarnado por Jaime Garzón, definió, hace más de 20 años, los nuevos aires intelectuales del neoliberalismo en la política colombiana, representados en la figura de Álvaro Uribe Vélez.

El 13 de agosto de 1999 fue asesinado el abogado, periodista, político, comunicador social, humorista, pero sobre todo luchador por la paz, Jaime Garzón Forero. **Tras 19 años, el crimen de Garzón, al igual que el de miles de luchadores sociales de la paz y la vida, sigue en la impunidad.** Esa impunidad orquestada desde los altos poderes políticos, económicos, comunicativos y judiciales de este país, de esta Colombia que Jaime creyó podía ser diferente, y por la cual ofreció toda su vida y labor.

Garzón no solo **se atrevió a criticar y contradecir el régimen**, sino que además tuvo la osadía de hacerlo desde los grandes medios de comunicación y esa osadía le costó su vida; tal cual como ha sucedido con tantos campesinos, obreros, estudiantes, miembros de Juntas de Acción Comunal, indígenas, afrodescendientes, defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras, etc., que han tenido la valentía de asumir un liderazgo en defensa de las comunidades, del medio ambiente, del territorio y se han encontrado con la maquinaria asesina del Estado, representada en las Fuerzas Armadas gubernamentales, el ESMAD y por supuesto, en las ahora llamadas BACRIM.

“Es que a Álvaro le cabe el país en la cabeza, el vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir como una sola Convivir ¡ah Caray!”, diría Godofredo Cínico Caspa, advirtiéndole sobre el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Cual palabra profética, **de 2002 a 2010 en Colombia se recrudeció el régimen paramilitar**, complementado por un uso excesivo, descontrolado e incentivado de la fuerza, por parte de paramilitares, policías y militares.





Durante los 8 años del gobierno de Uribe, se incrementaron las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; de los casos más sonados, los mal llamados Falsos Positivos, que dejaron como saldo más de 2.300 jóvenes asesinados, todos hijos de familias en situación de pobreza. Sin embargo, no podemos olvidar masacres, documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, como la de Tomarrazon, Guajira, el 30 de agosto de 2002, en donde murieron 19 campesinos de la etnia indígena Wiwa; la de Bahía Portete, Guajira, el 18 de abril de 2004, donde fueron asesinados 30 indígenas

Wayuu; la de Flor Amarillo en Arauca, el 20 de Mayo de 2004, donde paramilitares en asocio con la Brigada 18 del Ejército, asesinaron 21 personas; le de San Juan de Arama en el Meta, el 15 de abril de 2006, donde tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil No. 12 ejecutaron a diez campesinos e hirieron a cuatro más, entre los que se cuentan varios niños; entre otras masacres, que ascienden a más de 26 en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.

Hoy tras 19 años sin Jaime Garzón, 19 años en los que el movimiento social ha tenido que despedir a miles de sus

luchadores, solamente en lo que va de 2018 más de un centenar de líderes sociales han sido asesinados, la familia y amigos de Jaime y de tantos que han ofrendado su vida, tienen que, impotentemente, ser testigos de cómo, quienes determinaron cegar la vida de sus seres queridos, hoy continúan en el poder, manipulando estratégicamente todas sus fichas, que les permitan mantener el ocultamiento de la verdad y seguir siendo dueños del sistema económico del país, sostenido sobre la vida y dignidad del pueblo colombiano.

Tras 19 años de impunidad y con la llegada al gobierno de otra “neoliberal neoliberal”, la de Iván Duque, **en Colombia se hace cada día más vigente que el querer y luchar por la paz, es una enfermedad mortal que pareciera no tener cura**, y que por lo contrario cada día mata más soñadores de la vida. Y no tiene cura, porque quienes toman la vocería para expresar los dolores del pueblo, denuncian precisamente aquellos gérmenes que carcomen y corroen el territorio colombiano y sus gentes. Aquellos gérmenes encarnados en los grandes empresarios y políticos, esos que se auto nombran como la “gente de bien”,

cuando realmente están dispuestos a hacer lo necesario, a usar todo su poder y dinero para silenciar la voz de aquellos que ponen en jaque sus intereses y estatus social y económico.

Como diría Godofredo, “la gente de bien por fin podrá disfrutar de la renta en paz como debe ser, y será el quien por fin traiga de nuevo al único redentor de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, quien llegara acompañado de su corte angelical de soldados norteamericanos, quienes humanizaran el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita”.

A la memoria de Jaime Garzón y de todos aquellos que han muerto por el solo hecho de pensar diferente, de no estar de acuerdo con el régimen impuesto, así como los miles de colombianos y colombianas que han sembrado su vida por la construcción de una Colombia digna, nosotros, el pueblo humilde y honrado, les debemos una verdadera **conmemoración representada en la unión, en la lucha, en la movilización.**

A Jaime y a todos los que nos han querido arrebatar, pero que siguen vivos en la memoria de nuestras luchas ¡Hasta Siempre Compañeros!



DRONES DE CHINÁCOTA PARA CARACAS

El último intento de asesinar a Nicolás Maduro ocurrió el 4 de agosto de 2018 en Caracas, cuando el Presidente de Venezuela, junto a altos funcionarios y la cúpula militar, se encontraban en la conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.

En las cercanías del sitio del desfile conmemorativo fueron activados 2 drones DJI-M600 de tipo industrial, cargados **cada uno con 1 kilo de explosivo C4**, los cuales fueron desviados por equipos inhibidores de señal de los organismos de seguridad del Estado venezolano.

Los organismos de seguridad y justicia capturaron algunos responsables, emitieron órdenes de captura a otros y solicitaron en extradición a Estados Unidos y Colombia, a los que allí se refugiaron.

Los patrocinadores

Aparece involucrado el presentador peruano Jaime Bayly, quien en varias oportunidades por televisión desde los Estados Unidos confesó que 8 días antes había participado en una **reunión donde se definió el frustrado magnicidio**, que él lo había apoyado e incluso prometió si era necesario regalar otro dron... colocó como héroes los que han ejecutado estos atentados y aseguró que seguirán intentando asesinar a Maduro.

El pasado 31 de julio, Juan Manuel Santos, siendo aún el Presidente de Colombia, había dicho, “veo cerca la caída del régimen de Maduro en Venezuela” además agregó, que **“ojalá mañana mismo terminara el régimen Chavista”**, frente a lo cual “Colombia estaría más que dispuesta y lista a ayudar en todas las formas posibles”.

Otro expresidente y actual senador de Colombia Álvaro Uribe, también había manifestado la necesidad de “un **golpe de estado en Venezuela** contra

Nicolás Maduro, que sea ejecutado por las fuerzas militares, para hacer una transición rápida convocando a elecciones... Estados Unidos debe ayudar a promover esa decisión”.

El abogado de Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella en el diario El Heraldo de Barranquilla tituló “La muerte del tirano”, donde entre otras cosas dijo: “los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno, debe entender que **la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria, para garantizar la supervivencia de la República**”.

El plan, paso a paso

Hasta ahora, como autores intelectuales aparecen Osman Alexis Delgado Tabosqui, financista residenciado en los EEUU, y Rayder Alexander Ruso Márquez alias “Pico”, refugiado en Colombia, ambos estuvieron también involucrados en el ataque al fuerte Taramacay, en el Estado Carabobo el 6 de agosto del 2017.



Como autores materiales aparecen el Sargento retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Monasterios Vanegas alias "Bons", quien detenido, dio detalles sobre los autores de este intento frustrado de magnicidio; éste contrató a los 11 sicarios, organizó su entrenamiento en el manejo de drones y explosivos, en la granja Atalanta del municipio de Chinácota, cercana a Cúcuta, la capital de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela; allí permanecieron desde abril hasta finales de junio del presente año. A los 11 les ofrecieron 50 millones de dólares y enviarlos a vivir a los EEUU.

El plan inicial era realizar el atentado el 5 de julio, durante el desfile militar del aniversario de la firma de independencia de Venezuela, pero no pudieron porque los drones no llegaron a Venezuela provenientes de Colombia. Una vez los recibieron decidieron atacar el 4 de agosto, para lo cual conformaron 2 comandos, con un dron cada uno, tenían comunicación y orientación en directo de Osman Tabosqui desde los EEUU.

Dice el sargento Monasterios y otros implicados, que para los traslados y cruce de la frontera entre Colombia y Venezuela, **contaron con el apoyo de los dirigentes de la oposición venezolana Julio Borges y Juan Requesens**, lo mismo que del funcionario de la Inmigración de Colombia, Mauricio Jiménez.

Pocas horas después del fallido atentado, la periodista Patricia Poleo desde la televisión de Miami, leyó el comunicado donde los autores del atentado, auto-denominados "soldados de franja" se adjudican éste ataque.

Condena mundial

Numerosas declaraciones de rechazo a este atentado han emitido personalidades, organizaciones sociales y políticas, organismos internacionales y gobiernos de distintos países.

El Ejército de Liberación de Colombia se une a este rechazo, por medio de una declaración de la Dirección Nacional:

CONDENAMOS EL ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE MADURO

La Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional condena el atentado realizado contra el Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela y se solidariza con la búsqueda de soluciones pacíficas para los problemas de la sociedad venezolana.

Rechazamos la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de Venezuela, y sus planes para derrocar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Llamamos a la comunidad internacional a respetar las decisiones soberanas del pueblo venezolano, para autodeterminar sus destinos.

Exhortamos al pueblo colombiano a persistir en el logro de una solución política del conflicto interno y a no dejarnos arrastrar a una guerra entre dos naciones vecinas y hermanas, como lo son Venezuela y Colombia.

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Dirección Nacional

Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia

Agosto 6 de 2018

**EN VEZ DE ASESINARLO,
¿POR QUÉ NO LO CAPTURARON?**

Uno de los temas de debate con los representantes de la Fuerzas Militares estatales, en el reciente esfuerzo por pactar un nuevo cese al fuego bilateral, fue sobre el acatamiento de leyes mundiales que rigen las contiendas bélicas, sobre todo la más obligante de todas, conocida como el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Me refiero a este debate, porque a un comandante de nuestra Dirección Nacional, los militares en vez de capturarlo, lo asesinaron; violando flagrantemente el DIH, que por ley colombiana deben cumplir, ya que, desde diciembre de 1994, esta norma mundial fue integrada al Cuerpo Constitucional de Colombia.

El Ministro de defensa, a este asesinato lo llamó una “neutralización”, en un Trino que escribió minutos después de dar la orden para quitarle la vida a nuestro compañero. Así escribió:

*“Alias #Samuelito o #Samuel, llevaba 30 años delinquiendo en el #Eln, hacia parte de la dirección nacional de esa guerrilla y hoy **fue neutralizado** en #SanPablo, #Bolívar por los Comandos de las @FuerzasMilCol*

en coordinación con @PoliciaColombia tras volver de su escondite en Vzla — Mindefensa (@mindefensa) 27 de julio de 2018“.

Los diarios que registraron su asesinato, claramente expresaron que él tenía una orden de captura en su contra:

“El jueves 26 de julio pasado, luego de una operación militar realizada en la vereda Cienegueta del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, el Ejército confirmó la muerte de Jacob David Acuña Celis, alias Samuelito, integrante de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional. Llevaba cerca de 30 años en esa organización guerrillera, donde estuvo en las direcciones de varios frentes de guerra como el Nororiental, Suroccidental, Norte y actualmente se encontraba en el Darío Ramírez Castro. **Tenía orden de captura** por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión, era solicitado por la Fiscalía 99 especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos de Cúcuta” [1].

Si Samuel se encontraba en una pequeña finca del lugar, sin uni-

forme, sin portar su fusil y acompañado de civiles... los militares, ¿Por qué no procedieron a capturarlo, si ésta era la orden judicial? ¿Quién del alto mando militar, cambió la orden de captura por una orden de ejecutarlo? ¿Quién va a responder por este crimen?

Es necesario comparar este acto delictivo, con las detenciones de militares que hacen las unidades guerrilleras del ELN. Sobre la más reciente, así se refieren los militares en un Comunicado:

“El comando de la Fuerza de Tarea Quirón orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, informa que el 8 de agosto del 2018, en zona rural del municipio de Fortul, fueron detenidos por el Ejército de Liberación Nacional, los soldados Vega Díaz, Rojas Ovando y Caro Bañol, orgánicos del Grupo de Caballería Mecanizado N°18 General Gabriel Reveíz Pizarro, quienes se encontraban **vistiendo prendas de civil y sin armamento**.

El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones que violan los Derechos Humanos y que constituyen una clara infracción a lo

preceptuado por el Derecho Internacional Humanitario, **encontrándose en total estado de indefensión**.

‘Fe en la causa’. Saravena, Arauca 9 de Agosto de 2018” [2].

Es necesario recordar que una vez ocurren estas detenciones, es tradición del ELN asumir responsabilidad por ellas, comprometerse a proporcionar buen trato a los detenidos y a retornarlos pronto al seno de sus familias.

Si leen con atención el Comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón, en él critican al ELN por capturar a tres soldados y por ello consideran que violamos el DIH, ¿Alguna vez los militares reconocerán que matar a otro que está indefenso, en vez de capturarlo, es una gravísima violación del DIH, por tratarse de un crimen de guerra?

[1] Integrante de la Dirección Nacional del ELN muere en operación del Ejército. El Colombiano, 26-07-2018.
[2] www.ejercito.mil.co/comunicados



“¿Será posible que antes
que nos maten a todos,
seamos capaces de
reaccionar?”

Jaime Garzón
asesinado el 13 de agosto de 1999

